

# VULNERABILIDAD EN EL SALVADOR:

Los terremotos que azotaron al país, causaron mucho dolor entre las familias salvadoreñas y una destrucción física de grandes proporciones en viviendas, edificios, carreteras, etc., es pertinente realizar un análisis sobre la vulnerabilidad del país que se oriente más allá del movimiento en sí de la naturaleza, poniendo énfasis en las condiciones precarias y más vulnerables en los ámbitos económicos y sociales para la mayoría de la población.

El daño sufrido modifica sustancialmente las ya deterioradas condiciones de vida y el mapa de pobreza que subyace en la sociedad. Los estragos de los sismos, agudizaron el drama social existente, y confirmaron lo endeble que son nuestras estructuras para mitigar los riesgos dentro de una concepción de desarrollo integral y de largo aliento. El propósito de estas líneas gira en torno a llamar la atención más sobre la vulnerabilidad social que nos caracteriza como nación, en lugar de centrarnos en la vulnerabilidad física y territorial que presenta nuestro país.

Desde esa perspectiva, se impone superar el análisis reduccionista que impera en los análisis sísmicos sobre vulnerabilidad con marcado énfasis técnico, para centrarnos en el aspecto social consustancial a los terremotos y a otros eventos naturales. Se orienta la reflexión dentro de una concepción que involucra tanto a los modelos de desarrollo y su incapacidad para resolver los problemas estructurales insolutos, como los desafíos que le deparan a la sociedad a partir de ese déficit social. He aquí el quid de la vulnerabilidad social que se convierte en jaula de hierro, parafraseando a Weber, para la mayoría de la población que sufrió las consecuencias de los sismos.

Las cifras utilizadas como saldos producidos por los sismos, sólo confirman nuestra hipótesis acerca de la vulnerabilidad social que caracteriza a la sociedad salvadoreña, cuyos niveles de vida están comprometidos con las decisiones que adoptan los gobiernos en sus agendas públicas, y que precisamente no rewerten el estilo de vida que han soportado muchos salvadoreños de cuantos gobiernos han pasado en la historia del país a administrar el Estado.

## Aspectos sobre riesgo y vulnerabilidad

La literatura existente acerca de la vulnerabilidad asociada a los desastres naturales tiende a sobrevalorar la parte técnica, en detrimento de la parte social que es consustancial a todos los catástrofes naturales. No se dimensiona el entramado social presente en la relación Estado-sociedad, dado el sesgo que se le otorga a la aplicación de la noción de vulnerabilidad. Sin embargo, dicho análisis puede servir para colocarlo en una perspectiva mucho más integral, en la que «lo social» tenga un adecuado tratamiento analítico.

En tanto no se puede predecir un terremoto con el nivel actual del conocimiento sobre el tema, lo más realista consiste en referirse al «riesgo». El objetivo de asignar un grado de riesgo no es otra cosa que atenuar los efectos de un terremoto. Desde esta perspectiva, si presumimos la ocurrencia de un sismo y nos imaginamos cuál sería su peor consecuencia, podríamos tomar las precauciones adecuadas para evitar un daño mayor. Así se impone identificar las zonas de alto riesgo, sin excluir otras que pueden ser afectadas por un terremoto u otro evento natural o por intervención de los seres humanos. Sin

embargo, el riesgo no sólo es plausible en los análisis sísmológicos, también es consustancial a la parte social por la descarga que provocan los sismos en vidas humanas y materiales, dejando como resultado una destrucción en el plano social que hace estragos en muchas personas que pierden sus bienes y pertenencias.

También es de rigor efectuar un análisis geológico de la corteza terrestre, ya que la ubicación y el monitoreo de las fallas de la corteza terrestre nos dan las zonas de mayor vulnerabilidad geológica y podríamos reducir nuestro territorio de riesgos. Este análisis podría servir para ubicarlo en una perspectiva más integral sobre la vulnerabilidad, considerando el daño y la destrucción que provocan los sismos en la sociedad.

Se ha planteado que en el concepto de riesgo natural entran parámetros muy similares a los manejados en el de impacto ambiental<sup>(1)</sup>: interferencia, transformación. Ambos conceptos que involucran una confrontación entre los procesos naturales y sociales, aunque en el caso del riesgo tratan de deducirse los cambios de valor que puedan producirse en el medio social, debido a la actuación de los procesos naturales, mientras que en el impacto sucede a la inversa.

Es atrevido afirmar que existe un conflicto entre la naturaleza y los procesos sociales, aunque por principio son distintos, pues en este caso no podríamos llegar a un acuerdo con la naturaleza para solucionar las crisis que provoca, dado que no existe esa posibilidad y necesidad.

En una correcta evaluación del riesgo interviene la peligrosidad y la vulnerabilidad. La primera comprende el



de eximirse de responsabilidad a las otras estructuras que la complementan: ahí está el quid de la relación entre Estado y sociedad. Cuando estas esferas se alejan deliberadamente o por razón de Estado, las consecuencias son desastrosas para la sociedad y sus integrantes.

### Riesgo y vulnerabilidad en El Salvador

Históricamente está demostrado que El Salvador, igual que muchos países de menor desarrollo y con nula tecnología para enfrentar desastres naturales, es vulnerable, en el amplio sentido de la palabra, a dichos desastres provocado por inundaciones, sismos, derrumbes, deslizamientos, etc.

Los registros nacionales sobre eventos naturales evidencian la fragilidad y vulnerabilidad de nuestras estructuras económicas y sociales, cuyos efectos tienen una alta repercusión, debido a los saldos y secuelas producidas tras la ocurrencia de cualquier fenómeno natural.

El registro de eventos sucedidos entre 1980 y 1998, un poco más del 70 por ciento se refiere a inundaciones, deslizamientos, sequías, incendios, accidentes y contaminación. Al margen de los eventos de característica antrópica, los reportes con características naturales constituyen un poco más del 35 por ciento del total de desastres registrados. En relación a los eventos naturales, se ha apuntado que: «La mayor incidencia la muestran los deslizamientos, los que tienen relación directa con la forma de ocupación del suelo urbano dentro del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), lo cual ha llevado a ubicar a muchos sectores poblacionales de precaria condición, a lo largo de quebradas y ríos, incrementando las vulnerabilidades sociales y estructurales. Dada la ausencia de medidas de mitigación de los ries-

gos dentro de estas zonas, por lo costoso de las obras de contención, primordialmente, y por la ausencia de un sistema económico que les posibilite incrementar sus niveles de acceso a otros territorios menos vulnerables»<sup>2</sup>. Todos los eventos pasados en esas dos décadas, sean de características antrópicas o naturales, muestran la incapacidad de prever esos fenómenos y la vulnerabilidad social asociada a ellos, afectando severamente a las personas más pobres de nuestra sociedad.

Ante la certeza de que las fallas que cruzan nuestro territorio nacional, ya sea de origen volcánica o tectónicas, es decir, las fallas locales y las placas que forman parte del Cinturón de Fuego (Océano Pacífico), evidencian una zona de alta vulnerabilidad sísmica; a pesar de ello y de conocer los inminentes peligros a los que estamos expuestos, se podría sostener que no ha existido un modelo de desarrollo integral que evite la altísima vulnerabilidad social a la que está expuesta nuestra población sobre todo la que vive en condiciones precarias cada vez que ocurre un terremoto.

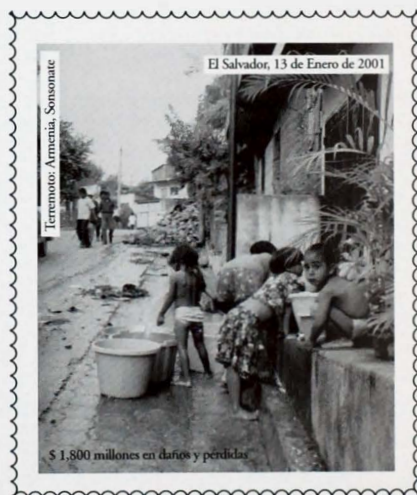
El país estructural y territorialmente es vulnerable, pero también dentro de la sociedad la mayoría de la población es altamente vulnerable no de manera casual, sino que responde y obedece a factores que lo han propiciado ya sea desde el Estado mismo o a partir de la construcción de una estructura económica desarticulada y con pocos incentivos para la mayoría de la población que vive en

estado de pobreza (absoluta o relativa), los marginados estructuralmente, los de El Salvador profundo.

### La vulnerabilidad como dato estructural

En razón de la inexistencia de un sistema justo, incluyente, integrador, democrático (en el sentido de forma de vida), que provea las condiciones de vida mínima a la mayoría de la población, la vulnerabilidad ha sido una constante que ha dejado sus huellas desastrosas en la mayoría de las población, precisamente por el desajuste entre Estado y sociedad o por la falta de interacción recíproca entre ambos componentes indispensables para la construcción de un nación estable y soberana.

Por ser el Estado la estructura por antonomasia que procura garantizar bienestar a la población, sobre todo a los pobres estructurales que están dispersos en nuestra sociedad, no cumplir con este imperativo social no sólo en-



Nivel de pobreza por departamento en El Salvador, 1998.

Departamento	Pobreza Extrema	Población %	Pobreza Relativa	Población %	No pobres	Población %
Ahuachapán	113,797	36.88	87,847	28.47	106,885	34.64
Santa Ana	101,798	19.04	163,871	30.65	268,984	50.31
Sonsonate	81,605	19.02	121,679	28.36	225,766	52.62
Chalatenango	59,366	30.71	55,731	28.83	78,213	40.46
La Libertad	70,623	10.95	141,762	21.98	432,573	67.07
San Salvador	179,493	9.49	398,326	21.06	131,3568	69.45
Cuscatlán	32,381	16.32	51,727	26.07	114,288	57.60
La Paz	66,109	23.33	89,543	31.60	127,712	45.07
Cabañas	69,738	46.14	37,333	24.70	44,089	29.17
San Vicente	48,230	30.85	44,728	28.61	63,379	40.54
Usulután	99,970	29.74	109,214	32.49	126,963	37.77
San Miguel	108,706	23.44	124,103	26.76	230,954	49.80
Morazán	68,188	39.61	45,619	26.50	58,341	33.89
La Unión	79,104	27.95	91,698	32.40	112,217	39.65
<b>TOTAL</b>	<b>1,179,108</b>		<b>1,563,181</b>		<b>3,303,932</b>	

Fuente: DOGESTYC, EHPM 1998, Ministerio de Economía.

Población total = 6,586,221

Población con pobreza absoluta = 1,719,108

Porcentaje de personas pobres (relativa y absoluta) = 49.84%

Población con pobreza relativa = 1,563,181

Población total en condiciones de pobreza = 3,282,289

turbia la necesaria relación entre Estado y sociedad, sino que deja estructuralmente en estado de vulnerabilidad a la mayoría de la población por no contar con los medios necesarios para vivir con dignidad, incumpliendo con su objetivo estratégico de llevar bienestar general a través de una política social que ataque y reduzca las condiciones de vulnerabilidad social.

Cada vez que sucede un terremoto de gran intensidad que sacude al territorio nacional o parte de éste, sale inevitablemente a flote El Salvador profundo que en condiciones normales encubre el verdadero rostro que nos ha caracterizado como nación, esto es, el país marcado y dividido por grandes zonas de pobreza entre medio de pocas zonas modernas, dibujando y perpetuando un subdesarrollo peculiar que es tan vulnerable a condiciones adversas ya sean naturales o humanas - incluso a situaciones externas que ocurren en otras latitudes -, principalmente por el impacto que produce a esas zonas en forma desigual, descargándo-

se más hacia las zonas abundantes de pobreza que cruzan todo el territorio nacional.

La historia registra el impacto brutal que producen los fenómenos naturales a los salvadoreños más vulnerables por su estado de vida precario y deteriorado, en consecuencia, son vulnerables estructuralmente y sin posibilidades de reducir los riesgos dada su exclusión o marginación social dentro de las concepciones de desarrollo que se han aplicado a lo largo de la historia.

No es extraño que ante tal situación se plantee que: «Los terremotos, los huracanes, las inundaciones, los derrumbes y los incendios forestales son más destructivos no porque sean más severos, sino porque las políticas gubernamentales han puesto a las personas en posiciones de vulnerabilidad»,<sup>43</sup> dejando entrever una responsabilidad estatal en las consecuencias que han causado un gran estrago en la sociedad. Aunque sea sólo parcial, geográfica y territorialmente, el efecto de un terremoto, corresponde a fortiori prevenir

y mitigar las consecuencias de una magnitud y cobertura mayor para salvar vidas humanas y aminorar las pérdidas materiales, como lo ocurrido el 13 de enero y 13 de febrero, respectivamente.

## Situación post-terremoto

Hay que dejar por sentado, en rigor, que de acuerdo a los saldos producidos por los terremotos y según las causas de la nueva situación social emergente, es poco serio plantear volver a la situación - de vulnerabilidad - en la que se encontraba el país antes del 13 de enero<sup>44</sup>, frente al cúmulo de problemas sociales que están pendientes de resolverse.

Lo que está en cuestión tras el terremoto del 13 de enero pasado y el que le siguió un mes después, no es el resultado catastrófico provocado por ambos sismos - que por lo demás son impredecibles -, sino el modelo de desarrollo que se ha construido históricamente

mente y que ha pasado por remedos variados hasta llegar a la actualidad, pues la mayoría de la población vive en condiciones precarias y en un estado de marginación rotal que no tenemos posibilidades que construir su vida de acuerdo a sus condiciones materiales, garantizando sin más una calidad de vida precaria que se caracteriza por soportar una inseguridad alimentaria que denota con gran crudeza un estado de postración social.

Cuando no existe conciencia colectiva sobre este drama social que castiga - y sigue sin variar su tendencia - a la mayoría de la población, emerge el análisis reduccionista o el sesgo para abordar los desastres provocados por la naturaleza, analizando las consecuencias sólo desde el punto de vista técnico o geológico de cómo mitigar los riesgos y amenazas de la vulnerabilidad que presenta el país. Aunque se reconoce que el país es vulnerable<sup>(5)</sup>, se peca en el tratamiento y aplicación de esa vulnerabilidad, ya que no ha habido un reconocimiento público de que la sociedad es estructuralmente vulnerable, problema del cual no se eximen los gobiernos que han gobernado el país como actores propiciadores de ese rasgo estructural, y peor aún, vaciados de contenidos para enfrentar esa debilidad.

El sismo del 10 de octubre de 1986 dejó entrever, una vez más, lo tan vul-



nerable que resulta nuestra población y la infraestructura física del país ante movimientos telúricos, cuya magnitud de 7.9 en la escala de Richter, provocó destrucción y pánico. En esta ocasión el esfuerzo de reconstrucción físico se centró en la ciudad de San Salvador, por ser la zona más afectada por el terremoto, que destruyó y ocasionó daños en estructuras físicas - entre daños severos y daños ligeros- y pérdidas económicas entre muchas familias y empresas, cuyos ingresos monetarios se vieron afectados por el sismo. Sin embargo, la cobertura de la catástrofe



sólo provocó daños a la capital, aunque se dejó sentir en el interior del país.

Este terremoto, y sus esfuerzos de reconstrucción, pusieron al descubierto el alejamiento que existe entre el Estado y la sociedad no sólo en momentos de emergencia sino en una visión prospectiva de desarrollo nacional que genere la construcción de una nación menos vulnerable a eventos naturales o humanos. Aunque el país en esa época era presa precisamente de la vorágine de la guerra interna, ello no era excusa para no realizar un proyecto de



nación integrador y democrático. Todo esto parece indicar que no hay interés real en la agenda pública gubernamental de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, quienes únicamente observan con desencanto el crecimiento de la economía que le aseguran sus gobernantes en las ecuaciones económicas, sin que eso los saque del estado de postración social en la que se encuentran desde hace años y que devienen en eternos sujetos con estados vulnerables en su vida material.

Catorce años después del sismo de 1986, nuevamente El Salvador es estremecido por otro terremoto - con una magnitud de 7.9 en la escala de Richter, con la diferencia que el del año 2001, fue más devastador que el anterior pues abarcó a todo el territorio nacional, provocando daños precisamente mayores, dejando obviamente más destrucción que el sismo del decenio de los ochenta. En este sentido, el 13 de enero de 2001 constituye un punto de partida igualable con los sismos registrados en la historia salvadoreña, tanto por los daños provocados en infraestructura física, edificios, viviendas, como en pérdidas humanas y efectos psicosociales en la población tras la tragedia nacional, apuntaladas por las réplicas constantes que siguieron manifestándose en todo el territorio. En este estado de inse-



Fuente: Theres Roballe

guridad y zozobraviva la población salvadoreña, cuando acontece el segundo terremoto, el 13 de febrero, justo un mes después del primero, provocando más destrucción y daño en el territorio nacional, principalmente en la zona paracentral del país que fue el más golpeada por el segundo sismo (La Paz, Cuscatlán y San Vicente).

Este segundo terremoto - cuya magnitud fue de 6.6 en la escala de Richter- puso al descubierto la poca capacidad para gerenciar y prever una pérdida mayor provocada por réplicas de alta intensidad y magnitud; el 17 de febrero hubo otro temblor de 5.3 en la escala de Richter con epicentro en la zona sur de San Salvador. Mientras el gobierno recibía ayuda internacional y el COEN monitoreaba las ruinas provocadas por el catástrofe y arrojaba datos estadísticos de la situación de desastre, PRONASOL distribuía la ayuda, y las alcaldías llevaban alimento y enseres a las personas afectadas, pero sobrevino inesperadamente la descarga del segundo terremoto que no dio lugar a un alivio temporal, dejando al país en un estado de postración social por su saldo arrojado.

La situación nacional se agudizó aún más a raíz de este nuevo sismo, el cual depende completamente de la ayuda brindada por los gobiernos extran-

jeros, instituciones internacionales, iglesias, salvadoreños en el exterior y empresas para salir adelante en su proceso de reconstrucción, sumándose a esa labor humanitaria el esfuerzo nacional realizado días antes del 13 de febrero, que reunió más de 11 millones de colones para destinarlos a más del millón de salvadoreños/as damnificados/as del terremoto del 13 de enero, a fin de aliviar la situación en la que se encontraban.

Con los sismos del 13 de enero y el 13 de febrero, respectivamente, cuyo impacto en las familias pobres del interior del país fue mayúsculo en térmi-



nos de destrucción y daños materiales, así como pérdidas en vidas humanas, se pone en evidencia la vulnerabilidad social que caracteriza y atraviesa a todo el territorio nacional. Los departamentos y municipios más afectados por el terremoto del 13 de enero fueron Usulután, La Paz, La Libertad, Santa Ana, San Salvador y Sonsonate, sin desmerear importancia al resto de departamentos que sufrieron daños y destrucción en menor grado. Todos esos departamentos reportaron el mayor número de damnificados - más de 100 mil cada uno -, evacuaciones, lesionados y fallecidos, además de edificios públicos dañados, viviendas dañadas y destrui-

das y establecimientos de salud dañados. Sólo en viviendas dañadas, los departamentos de Usulután y La Paz salieron más afectados - con 30 mil 716 y 25 mil 106 - y con viviendas destruidas - 29 mil 301 y 17 mil 996 -, saliendo perjudicados también en viviendas destruidas en relación al resto de departamentos, La Libertad (15 mil 723), Sonsonate (10 mil 501) y San Salvador (10 mil 372). En este sentido, más de 200 mil familias afectadas en sus viviendas - entre dañadas y destruidas- han perdido todos sus bienes y pertenencias personales en tan corto tiempo, agravando más los índices de pobreza que caracterizan a la población del interior del país. De hecho, se ha reconocido que a raíz de los sismos que sucedieron al país se amplió la pobreza y que posiblemente se ha incrementado entre 7 y 10 puntos<sup>(7)</sup>.

El terremoto del 13 de febrero agudizó la situación dejada por el terremoto anterior, afectando más en esta ocasión a los departamentos de La Paz, Cuscatlán y San Vicente, respectivamente, en cuyos municipios y poblados se concentró el mayor número de destrucción y devastación. Aunque varios municipios quedaron completamente aislados - Candelaria, Guadalupe, Cojutepeque, San Vicente, San Juan Tepezontes, etc. - hasta el



momento sólo se está atendiendo la fase de emergencia en forma asistencialista, que no da lugar a una estrategia de desarrollo que mitigue la vulnerabilidad social del país. Sobre esos escombros sociales atendidos en forma asistencialista no se puede construir un porvenir más estable y seguro para los miles de damnificados que salieron perjudicados por los sismos.

Los municipios de Candelaria, El Carmen, San Cristóbal, San Ramón, etc., todos pertenecientes al departamento de Cuscatlán, acusan niveles alarmantes de necesidades básicas insatisfechas<sup>(8)</sup> (sin servicio de agua, sin servicio sanitario, rancho de choza o viviendas improvisadas, sin servicio de drenaje, sin electricidad, hacinamiento, etc.), que no tienen nada que envidiarle a los otros municipios (San Juan Tepezontes, El Rosario, San Pedro Masahuat, etc.) de los departamentos afectados por los sismos, así como de Comasagua (La Libertad), Tacuba (Ahuachapán), Alegría (Usulután), Santiago de María (Usulután), Armenia (Sonsonate). Esto sin embargo, sólo es reflejo de la alta vulnerabilidad social que acusa la sociedad salvadoreña y que interpela constantemente al Estado por no contar con una estrategia de desarrollo que modifique los indicadores que muestran insatisfacción social.

Al haberse modificado el mapa de pobreza a raíz de los sismos, ciertamente aquellos departamentos más afectados

(Cuscatlán, Usulután, La Paz y San Vicente) estarán en condiciones de vida deplorables, agudizando más los índices de pobreza y por tanto afectando el índice de desarrollo humano de los mismos. Si bien eran departamentos que no tenían índices de pobreza altos antes de los terremotos, con el impacto de éstos, en rigor, se ha incrementado a niveles altos que los deja en condiciones deplorables por el momento, dependiendo de la ayuda solidaria que reciben. La zona paracentral del país ha quedado con una fisura aguda en su geografía, de la cual pasará cierto tiempo para recuperarse. Por hoy, debe de llevarse aliento y esperanza a esta zona devastada, más que retórica y promesas incumplidas.

A raíz de la introducción del dólar como moneda de circulación nacional - por medio de la Ley de Integración Monetaria -, el gobierno se propuso lo siguiente, un mes y medio antes de entrar en vigencia la ley: «La integración que estamos proponiendo es una visión completa del país: es una integración social y geográfica, es una integración humana y económica»<sup>(9)</sup>. Este planteamiento contrastado con la realidad, tiene dos significados: o es un romanticismo bondadoso surgido de las entrañas del gobierno que desconoce la realidad de El Salvador profundo o es otra promesa de las cuales abundan en la historia del país. Arremeter ese desafío implica cambiar el orden social existente a través de un modelo de desarrollo

que ponga entre sus prioridades esos objetivos estratégicos.

No se percibe en las esferas estatales una dimensión exacta de la vulnerabilidad social que desnudaron ambos terremotos. El país cuenta en este momento con un millón 532 mil 919 damnificados que, según la proyección de población para el año 2000, equivaldría a tener aproximadamente a un cuarto de población en calidad de damnificados, recibiendo la asistencia y ayuda de parte del gobierno central, gobiernos locales y demás instituciones y ONG's volcados a la atención de esta población. Lo que más preocupa hacia futuro es que modificar esta situación requerirá de un estrategia de desarrollo que actualmente no se percibe. Lo que está claro es que con los dos sismos registrados dos meses atrás, el mapa de pobreza del país cambió totalmente, modificando los viejos mapas de pobreza existentes a otros de mayor acusación en sus índices.

Cambiar o mitigar el estado de vulnerabilidad social que caracteriza al país, sólo puede ser posible en el marco de una estrategia de desarrollo sostenible que considere las causas profundas de los males estructurales y coyunturales que subyacen en la sociedad. De acuerdo a la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), existen actualmente más de 107 municipios afectados por los terremotos<sup>(10)</sup>, que esperaban res-



Fuente: Thania Raballo



puestas concretas para salir del estado de atraso que los ha caracterizado. La ayuda humanitaria mientras sea concebida como asistencia temporal e inmediata a esos municipios afectados, niega cualquier rumbo y visión de desarrollo que empalme con las necesidades estructurales de la población afectada. El desarrollo local es algo más serio que distribuir víveres y medicinas; requiere de una base mínima para satisfacer las necesidades apremiantes de la población damnificada, plasmada en un plan de desarrollo participativo, coherente, viable y sustentable.

En la fase de emergencia que vive el país desde el 13 de enero del 2001, cabe indudablemente la necesidad de atender urgentemente a las víctimas de los terremotos, por haber perdido todo sus bienes y pertenencias que los dejó en el completo desamparo material para convertirse en damnificados. Sin embargo, el procedimiento asistencialista que se está desarrollando impide observar y plantear una estrategia de más largo plazo concretada en un modelo de desarrollo sostenible, en la que los actuales damnificados sean actores protagónicos para no seguir siendo sujetos vulnerables a los acontecimientos naturales. La distribución de víveres y medicinas a los damnificados es prioritaria en estos momentos; pero más importantes es construir una base de sustentación que implique construir juntos - afectados y no afectados- una concepción de desarrollo que conside-

re a los estructuralmente pobres actores protagónicos para que en el futuro sean parte de los cambios en su situación deplorable crónica. La situación de emergencia tiene su final, por tanto, las dadas no pueden ser parte de un modus vivendi dentro de una concepción de desarrollo.

Las exigencias de cambiar el orden social existente a partir de una nueva visión tiene eco nacional, aunque no se plantea de manera precisa y no llegue al asunto medular del problema, pero son matices convergentes:

«Los desastres naturales más recientes han evidenciado, con un dramatismo muy vívido, los tremendos desajustes existentes en la sociedad salvadoreña. Y por eso, aparte de atender las emergencias y contingencias en función del presente y de cara al futuro, estos fenómenos nos subrayan la per-

manente necesidad de seguir renovando nuestros esquemas de vida, para asegurar la paz, la estabilidad, y el desarrollo, que en buena parte son esfuerzos pendientes<sup>(11)</sup>. Sin embargo, no se puede renovar un estilo de vida que para la mayoría de la población ha sido el mismo, más bien lo que se impone es cambiar la situación de vida que actualmente tienen miles de familias salvadoreñas, en medio de un desempleo y subempleo alarmante.

Reconociendo que «...al optar un esquema de desarrollo excluyente [el gobierno] ha profundizado las condiciones de vulnerabilidad de nuestro país», se plantea la «... Reducción de la vulnerabilidad socioeconómica y ambiental»<sup>(12)</sup>, como parte de una agenda de desarrollo integral. Esta visión debe ser profundizada si existe voluntad política del gobierno para acometer semejante tarea nacional, con la participación

Departamento	Fallecidos	Lesionados	Damnificados
La Paz	58	806	48,656
Cuscatlán	158	1,126	94,724
San Vicente	84	1,120	55,495
San Salvador	4	-	1,370
Morazán	1	-	-
Cabañas	-	-	2,638
Chalatenango	-	-	-
Usulután	-	1	-
San Miguel	-	-	230
<b>TOTAL</b>	<b>305</b>	<b>3,153</b>	<b>203,113</b>

Fuente: Sitio Web del Comité de Emergencia Nacional:  
www.coen.gob.sv/estadisticas.htm





Foto: Theres Ruballo

de los actores sociales que necesiten desarrollar el país.

El trasfondo de esos planteamientos no es sino una demanda por un desarrollo nacional que conduzca a una reducción de la vulnerabilidad social que beneficie a la mayoría de la población que ha sido afectada por los terremotos, sin olvidar que en otras partes del territorio nacional persiste la vulnerabilidad social como característica dominante, lo cual demanda atención como parte de ese desarrollo dado que son áreas geográficas que han vivido en permanente vulnerabilidad social por su situación de vida precaria.

### Fracturamiento entre Estado y sociedad

Retrospectivamente, ha existido en el país una fractura entre Estado y sociedad, desde el momento mismo que la clase política, una vez que administra el Estado, se ocupa de satisfacer los intereses particulares de los sectores económicos dominantes según sus requerimientos. Esto los conduce a alejarse de los intereses colectivos de la sociedad, provocando una brecha irremediable entre ambas esferas del sistema. El resultado de ese fraccionamiento es la construcción de un sistema político proclive a los intereses gubernamentales y de pequeños

grupos, en detrimento de la sociedad civil que es su base de sustento.

El hecho de que existan pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco, no es por que sea un acto forzado por una explicación metafísica, sino porque hemos tenido como nación gobernantes con modelos de desarrollo fallidos en sus objetivos estratégicos y sin posibilidades de cambiar el status quo de la mayoría de la población salvadoreña. La polarización del ingreso y la riqueza en tanto injusta deviene en condición para que la mayoría de la población sea vulnerable estructuralmente, además de la crónica situación de desempleo evidente en el interior de la República.

Habida cuenta esa memoria histórica que nos marca como nación, no es extraño que los niveles de acaloramiento entre el gobierno y la oposición real en la forma de enfrentar la situación de emergencia provocada por los dos terremotos, son el reflejo por un lado, de la falta de acuerdos concertados que deben de imperar en momentos de angustia, el más obligado es el gobierno, pero además no existe cultura alrededor de ese objetivo; pero por el otro, del desinterés por corregir las fallas del modelo de desarrollo que se impulsa, dejando a su suerte o a la deriva la la sociedad y al tejido social que lo nutre.

En los planteamientos gubernamentales interesa más que la economía logre estabilidad y crecimiento reflejados en indicadores macroeconómicos, en tanto los índices de bienestar social se engullen y debilitan por la misma política económica que se implementa, arreciando más la deuda social que atrapa a la mayoría de la población salvadoreña. Mientras el Estado, desde la década de los noventa, asegura en nombre del mercado la mejoría de la economía, la sociedad experimenta desatención y fractura, importando poco la otrora «justicia social» que sirvió de base y argumento a los actores antisistema en el pasado reciente, mucho menos interesa la equidad que ha sustituido a esa categoría en el lenguaje social.

De modo que la ruptura entre Estado y sociedad es tal que ésta última depende de lo que aquél le permita hacer, está a merced de sus acciones, sacrificando - en esa relación - la sociedad sus energías y acciones para convertirse en una esfera pasiva y debilitada. La fisura provocada por el Estado a la sociedad vuelve a ésta vulnerable de acontecimientos naturales y de procesos socioeconómicos que la debilitan y la colocan a riesgos inevitables, dejando permanentemente en escombros a la población y sin posibilidades de remover su vida material a través de un modelo audaz, creativo y participativo que asegure bienestar social. Reconstruir la nueva sociedad sobre los mismos cimientos, es continuar en el mismo estado de vulnerabilidad que ha caracterizado a la mayoría de la población por muchos años, soportando penurias y calamidades de manera constante, así como inseguridad alimentaria, hechos que han negado un marco de desarrollo nacional.

A raíz del momento de emergencia que vive el país, seguir con el fraccionamiento entre Estado y sociedad, es aplazar la única posibilidad que tiene la nación para superar el estado de vulnerabilidad social mediante un mo-

delo de desarrollo sostenible justo y comprometido con las necesidades de la mayoría de la población.

## —La (re)construcción de El Salvador

En este momento de zozobra que aún se percibe en el ambiente por las constante réplicas provocada por los sismos, no es prudente actuar con gatopardismo, pretendiendo cambiar las cosas para que sigan igual en un esfuerzo de reconstrucción. El desafío nacional debe estar puesto en la búsqueda constante del desarrollo que evite las fuentes de vulnerabilidad social que caracterizan a la sociedad salvadoreña. Se deben expandir las capacidades básicas - como lo reconoció el Premio Nobel de Economía de 1998, Amartya Sen - como parte de ese desarrollo, a fin de reconstruir y rehabilitar el tejido social afectado por los terremotos, dotando de capacidades básicas a la población que por muchos años no la han tenido y construir así un desarrollo incluyente y equitativo. Un plan de reconstrucción que no considera estos desafíos estará aplazando una oportunidad para superar el estado de vulnerabilidad que pesa sobre la mayoría de la población salvadoreña.

Reeditar el pasado no es tan importante como construir un futuro mejor, fundamentado en un presente que permita la autorrealización individual y colectiva sobre una base que garantice el mínimo bienestar social. La memoria histórica es un dato importante para no continuar con el estado de vulnerabilidad que subyace en nuestra sociedad y que afecta a dos terceras partes de la población. No se trata de provocar una ruptura del orden de cosas existente, pero tampoco un continuismo de ese orden. Se impone, más bien, una ruptura en el pensamiento y la acción de los gobernantes para que formulen un plan de desarrollo sostenible que evite continuar con la vulnerabilidad social que pesa sobre la

mayoría de la población, destacando los aspectos socioeconómicos como partes indispensables para mejorar las condiciones y calidad de vida de esa parte de la población salvadoreña, que por muchos años han estado excluidos y rezagados de los esfuerzos de desarrollo que han pregonado los gobernantes.

En esta línea de pensamiento, activar las energías sociales y sus redes de apoyo comunitario, vuelve a la sociedad más solidaria y fraterna, enlaza las necesidades más primordiales que requieren atención prioritaria, empuja un trabajo colectivo bien fundamentado para que se tomen en cuenta en las políticas públicas y llevar así a la práctica sin contradicción «pensamiento y acción».

El esfuerzo de (re)construcción nacional necesita replantear la relación entre Estado y mercado, inclusive entre Estado y sociedad; no existen compartimentos estancos entre esas esferas. El saldo social provocado por los terremotos lo que vino a evidenciar es que la nación es un todo y que no debe haber fraccionamiento entre las partes que la constituyen; la sociedad no está de espaldas del Estado, ni éste es el único protagonista dentro de la sociedad. No debe haber fisura que los divorcie por intereses egoístas y dañinos de un grupo de poder en particular; el Estado debe garantizar el bienestar colectivo, controlando al mercado que es ciego y destructor de los intereses de los desvalidos o desposeídos de los medios fundamentales de producción.

Todos/as los damnificados/as ciertamente necesitan alivio temporal a su situación provocada por los terremotos, pero en un esfuerzo de (re)construcción se debe de garantizar las mínimas condiciones materiales de vida que apunten a mejorar el nivel de vida precario que secularmente los ha distinguido.

En el Estado debe prevalecer una racionalidad en las decisiones y accio-

nes que se ejecutan, pensando que la primera y última acción consiste en mejorar el bienestar de los salvadoreños, principalmente de aquellos que nunca han sido actores protagónicos en los estilos de desarrollos que se han aplicado en el país.

### NOTAS

- 1 Véase «Riesgo y desastre», Volumen 9, N° 52, mayo/junio 1999. Consultado en sitio Web: [www.Ciencia-hoy.retina.ar/hoy52/riesgo3.htm](http://www.Ciencia-hoy.retina.ar/hoy52/riesgo3.htm)
- 2 Véase Oporto, José Francisco, «El Salvador: Más de un década de desastres «naturales», Informe El Salvador, La RED/ITDG/FUNDE/OPAMISS, San Salvador, s/f.
- 3 Véase ECOTOPÍA, «La política estadounidense se debe atender las políticas de desastre en El Salvador», CoLatino, jueves 15 de febrero de 2001, p. 22.
- 4 Esa fue la afirmación del presidente de la República.
- 5 Así lo reconoció el presidente Flores en su discurso del 4 de febrero. Ver La Prensa Gráfica, 5 de febrero de 2001.
- 6 Dejó un saldo de 1,500 fallecidos, más de 10 mil heridos y otras 10 mil personas damnificadas.
- 7 El Coordinador de la misión evaluadora de CEPAL, Ricardo Zapata, así lo manifestó e igualmente el representante del PNUD en El Salvador, Bruno Moro, también lo confirmó con los porcentajes señalados. Cfr. La Prensa Gráfica, jueves 1 de marzo de 2001, p. 26.
- 8 Cfr., <http://www.minec.gob.sv/CUSCA.THM> 9 Cfr., La Prensa Gráfica, jueves 23 de noviembre de 2000, p. 15. El subrayado es nuestro.
- 10 Cfr., «La Prensa Gráfica, viernes 23 de febrero de 2001, p. 71.
- 11 Véase e l Editorial d e La Prensa Gráfica, «Sobre nuevas bases», viernes 23 de febrero de 2001, p. 27.
- 12 Ver Manifiesto de COMURES y ONG's, «Unámonos para reconstruir y desarrollar integralmente El Salvador», viernes 23 de febrero del 2001, p. 81.

